

NUE 282-A-2016 (MV)

Ramos Guevara contra Corte Suprema de Justicia

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las quince horas con tres minutos del treinta de marzo de dos mil diecisiete.

1. Descripción del caso.

Karen Beatriz Ramos Guevara apeló en contra de la resolución del Oficial de Información de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la **Corte Suprema de Justicia**, que denegó la información consistente en el “detalle de las notificaciones realizadas de la resolución de improcedencia dictada en el proceso de inconstitucionalidad referencia 144-2014, del 14 de enero de 2015. Especificando a qué instituciones se notificó dicha resolución y las fechas”.

El Instituto admitió y designó al comisionado **Mauricio Antonio Vásquez López** para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución.

Karen Beatriz Ramos Guevara indicó en su escrito de apelación que el Oficial de Información se declaró incompetente porque al tratarse de una actuación procesal, la información debía dirigirse a la Sala de lo Constitucional y no a la Unidad de Acceso a la Información Pública. La apelante considera que no es una atribución de la Sala de lo Constitucional la tramitación de las solicitudes de acceso a la información, sino del Oficial de Información de la **CSJ**, y este funcionario es quien debe requerirle la información a la Sala por ser esta, una dependencia del Órgano Judicial.

En fecha 6 de diciembre de 2016, el Comisionado Instructor, informó al Pleno, que las circunstancias evidentes en el proceso hacían viable la resolución del mismo, de acuerdo a los principios y disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), omitiendo la realización de la audiencia oral. A lo que el Pleno accedió.

2 Análisis del caso:

El orden lógico que seguirá el presente proceso es el siguiente: **(I)** consideraciones sobre el derecho de acceso a la información pública y sus límites; **(II)** Consideraciones sobre la Información Jurisdiccional y la Información No Jurisdiccional.

I. Antes de proceder con la decisión del caso, es preciso recordar que el derecho de acceso a la información tiene una condición indiscutible de derecho fundamental, anclada en el reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión —Art. 6 Cn.— que tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público, y en el principio democrático del Estado de Derecho —Art. 85 Cn.— que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la Administración.

El Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP), como todos los derechos encuentra límites en el respeto de otros derechos de igual jerarquía. Este ha sido desarrollado por un cuerpo normativo que se encarga de estructurar su ejercicio que es la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), y entre sus normas dispone que la información pública en algunos casos puede ser reservada o confidencial, en función de la protección de esos otros derechos frente al manejo o manipulación de terceros. Otro límite al acceso a la información pública, es la inexistencia que en breves palabras se refiere a información que no ha sido generada por el ente al que se le requiere o por motivos de fuerza mayor no se encuentra a disposición del ente obligado. Debe aclararse que cualquier límite alegado respecto al DAIP, debe ser debidamente fundamentado por la entidad que pretende invocarlo.

Del mismo modo, la LAIP establece los procedimientos para el ejercicio del DAIP, es decir los canales por medio de los cuales se puede acceder a la información. Sin embargo, estos canales responden a competencias determinadas que encuentran límites en las categorizaciones que existen sobre la información. Como por ejemplo, la distinción entre información jurisdiccional y no jurisdiccional de la **Corte Suprema de Justicia (CSJ)** o sus dependencias. En ese sentido, es pertinente determinar la naturaleza de la información solicitada por la apelante, que consiste en notificaciones dentro de un proceso de carácter jurisdiccional. Para tales efectos, no basta con revisar el contenido de la LAIP, sino que

además es necesario traer a colación los precedentes emitidos por este Instituto, así como otras fuentes que son igualmente válidas, como la Jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia a través de sus Salas.

II. En primer lugar, es pertinente señalar que la LAIP establece en su art. 13 la información oficiosa del Órgano Judicial, dentro de la cual no se contempla lo relacionado a las actuaciones procesales, ni tampoco en el resto del articulado es posible encontrar una disposición que se refiera a las mismas. Por ello es necesario traer a colación la Resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia, en el caso referencia 7-2006 Inconstitucionalidad, en la que se declaró no ha lugar la solicitud del Oficial de Información para tener acceso a información de dicho proceso. En el auto en mención, la CSJ indicó que **información jurisdiccional** es todo dato que constata la existencia o realización de un acto que tiene efectos o consecuencias, directas o indirectas, en un proceso o procedimiento tramitado ante autoridades que ejercen jurisdicción, tales como las fases del proceso, demandas, informes, audiencias, incidentes, recursos, decisiones, etc. De esto se sigue que este tipo de información alude a los actos por medio de los cuales se realiza el proceso¹. Por discriminación, se entiende que todo aquello que no se encuentra abarcado por el concepto de información jurisdiccional, será información no jurisdiccional.

Este Instituto ha resuelto que el canal para solicitar la información pública, que se encuentra en la LAIP, debe requerirse al Oficial de Información de la **CSJ**, entiendo que se trata de información no jurisdiccional, las sentencias firmes, y las actuaciones en procesos fenecidos. En consecuencia, la información jurisdiccional, debe requerirse a la dependencia en la que se encuentra la información. Así, en el presente caso al tratarse de información concerniente a un proceso de Inconstitucionalidad, debe solicitarse directamente a la Sala de lo Constitucional.

Por los argumentos antes expuestos, este Instituto debe confirmar la actuación del Oficial de Información de la **CSJ** ya que no es el funcionario competente para entregar la información requerida, y que lo pertinente es requerirla a la dependencia judicial que conoce

¹Sala de lo Constitucional, Inconstitucionalidad 7-2006 del 20 de agosto de 2014.

o conoció el caso, que es la Sala de lo Constitucional; tal como se informó en la resolución del Oficial de Información que se apela.

3. Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con los Arts. 6 y 18 de la Cn., 33, 94, 96 letra “b” y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve:**

a) **Confirmar** la resolución emitida por el Oficial de Información de la **Corte Suprema de Justicia (CSJ)** del 2 de septiembre de 2016.

b) Devolver al Oficial de información de la **CSJ** el expediente administrativo relacionado con el presente caso, una vez esta resolución adquiera estado de firmeza. Este expediente administrativo deberá ser retirado en las oficinas de este Instituto por dicho servidor público o persona debidamente autorizada.

c) Publicar esta resolución oportunamente.

Notifíquese.

ILEGIBLE-----CHSEGOVIA-----ILEGIBLE-----ILEGIBLE-----
PRONUNCIADA POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA
SUSCRIBEN : "RUBRICADAS"